



**Las concesiones del PSOE
fortalecen a la patronal
y a los franquistas**



¡LOS DERECHOS SE CONQUISTAN LUCHANDO!





Golpe militar en Sudán

El pueblo responde con otro levantamiento revolucionario



Marina Mata
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

El 25 de octubre el Ejército sudanés perpetró un nuevo golpe de Estado, pero la acción de los militares ha desatado una respuesta no prevista: el levantamiento del pueblo y la movilización de millones en las principales ciudades.

Los golpistas, con el general Al Burhan al frente, detuvieron al primer ministro, Abdallah Hamdok, y a varios altos cargos civiles. Disolvieron los principales órganos del Gobierno de transición cívico-militar, creados tras la insurrección revolucionaria de 2018/19, declararon el Estado de emergencia, la suspensión de artículos clave de la Constitución de transición, y la disolución de todos los sindicatos y asociaciones profesionales.

A pesar del amplio despliegue militar en las calles y la represión desatada, que ya se ha cobrado la vida de más de una treintena de personas y cientos de heridos, la respuesta de las masas fue inmediata y no cesa. La Asociación de Profesionales de Sudán y los comités de resistencia en los barrios, así como más de 20 organizaciones sindicales y profesionales, llamaron a la huelga general, paralizando el país con movilizaciones multitudinarias.

La contrarrevolución ha actuado como el látigo para un nuevo levantamiento revolucionario. El 30 de octubre, más de cuatro millones de sudaneses tomaron las calles de todo el país. Las imágenes de los militares retirándose ante el avan-

ce de la manifestación en Jartum, la capital, es una buena muestra de la fuerza de la revolución y de las posibilidades de tumbar el golpe militar.

Ante la contundencia de las movilizaciones y la huelga general, el propio Al Burhan ha decidido excarcelar a cuatro de los ministros civiles detenidos, y aceptar un nuevo Gobierno de transición, que podría ser encabezado de nuevo por el primer ministro depuesto. Esta maniobra solo pretende calmar la movilización y evitar una derrota total del golpe.

El espíritu revolucionario de 2019 marca el camino

Desde diciembre de 2018 a julio de 2019, Sudán vivió una insurrección popular que derrocó la dictadura del militar Al Bashir tras 30 años en el poder. La oleada de movilizaciones y huelgas que se sucedieron durante estos meses hicieron que el régimen y la cúpula militar, temerosos de perder el control y con la esperanza de mantener sus privilegios, se deshicieran de Al Bashir y anunciaran la formación de un Consejo Militar de Transición hasta la celebración de elecciones democráticas.

Pero los trabajadores y jóvenes en lucha no aceptaron una solución que implicaba, en la práctica, mantener el régimen y a los militares en el poder.

La reacción de los militares ante la resistencia del pueblo fue brutal: las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) perpetraron una brutal matanza contra los manifes-

tantes acampados en Jartum, lo que supuso un punto de inflexión.

Las potencias imperialistas pasaron a la acción, presionaron para que se llegara a un acuerdo entre militares y civiles con el objetivo de desviar el proceso revolucionario con falsas promesas “democráticas”. Finalmente, se llegó a un acuerdo entre la principal coalición civil opositora y la junta militar con la creación del Consejo Soberano, integrado por seis civiles y cinco militares.

El Gobierno de transición democrática asfaltó el terreno a los militares

Que el nuevo Gobierno no fuera 100% militar no cambia en nada su carácter reaccionario. El mejor ejemplo es que el presidente del Consejo Soberano, el propio Al Burhan, y su número dos han sido los artífices del golpe de Estado actual.

Tanto el poder económico como el político han seguido en manos de la oligarquía y los militares, y al servicio de las distintas potencias imperialistas, que se enfrentan sin escrúpulos para repartirse las riquezas y recursos del país.

La pobreza no ha dejado de aumentar, y la escasez de alimentos y medicinas se ha disparado durante la pandemia. Con la excusa de refinanciar una deuda de 60.000 millones de euros, el FMI acordó con el Consejo civil-militar nuevos planes de austeridad, incluida la privatización de 600 empresas estatales, muchas controladas por el aparato militar, y la retirada de subsidios a combustibles o alimentos.

Fruto de esta situación estallaron importantes protestas contra el Gobierno, seguidas rápidamente del golpe militar bajo la retórica de querer “completar la revolución”.

Tanto los elementos civiles como los militares en el Gobierno han demostrado que su único interés es garantizar los intereses de los capitalistas, ya sean nacionales o extranjeros. Incluso ahora, tras el golpe de Estado, estos elementos civiles del Gobierno, con el exprimer minis-

tro Hamdok a la cabeza, no tienen ningún rubor para llegar a nuevas componendas con los militares.

Intereses imperialistas

Las potencias imperialistas se están posicionando en este nuevo escenario para garantizarse la mayor cuota de negocio posible, y el control de un país estratégico que es la entrada al Canal de Suez, por donde pasa gran parte del petróleo mundial.

Mientras EEUU, la UE, la ONU, el Banco Mundial o el FMI salían con la boca pequeña a condenar la actuación militar y a pedir al Ejército que diera marcha atrás, Rusia señalaba que no se había producido un golpe sino un “cambio de poder”.

EEUU no quiere perder pie en Sudán y, aunque ha amenazado con cortar financiación y ayuda humanitaria, tras la salvaje represión del 30 de octubre el envío especial del presidente Biden para el Cuerno de África afirmó que los militares habían ejercido la “moderación” en estas protestas. Lo mismo podemos decir de la UE, que financia el despliegue de tropas sudanesas en Libia para frenar el flujo de refugiados.

El otro gran poder imperialista, Rusia, respaldado por China, busca asegurar sus intereses en la zona e incrementar aún más su creciente influencia en África. De ahí su apoyo contundente al golpe militar, que busca asegurar los pactos firmados en su día con el dictador Al Bashir para la creación de una base naval rusa en el Mar Rojo.

Otras potencias como Egipto, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos han mostrado también su apoyo al golpe. Estas dos últimas, para seguir exportando oro de las minas de Darfur ilegalmente, continuar aislando a Turquía y Qatar, y mantener el apoyo de las RSF en la guerra con Yemen.

Tanto el imperialismo occidental como el imperialismo ruso, o del resto de potencias regionales implicadas, coinciden en una cosa: aplastar a toda costa el movimiento revolucionario.

**¡Hay que completar la revolución!
¡Por un Gobierno obrero
con un programa socialista!**

El Ejército se está enfrentando a una resistencia heroica de las masas que deja claro el vigor de la revolución y que puede hacer fracasar el golpe.

En 2019, la Asociación de Profesionales de Sudán y otras fuerzas de oposición, con la excepción del Partido Comunista, aceptaron el acuerdo para formar el Consejo de Transición con la vana esperanza de que así consolidarían un nuevo régimen con libertades democráticas. Sin embargo, como ya ocurrió durante la Primavera árabe, esta solución se convirtió en un callejón sin salida que ha acabado con un nuevo golpe militar.

La experiencia demuestra que la conquista de los derechos democráticos es parte de una lucha integral contra un decrepito capitalismo sostenido en el aparato militar y protegido por las potencias imperialistas.

La única opción para el pueblo sudanés es completar la revolución. Expropiar la riqueza de manos de la oligarquía y los imperialistas y ponerla al servicio de los oprimidos. Desterrar el régimen militar será realidad cuando las masas tomen el poder dando paso a un Gobierno obrero.

► izquierdarevolucionaria.net

Elecciones Venezuela 21N
La derecha proimperialista es enemiga del pueblo pero las políticas capitalistas del Gobierno llevan al desastre



Oleada de huelgas en EEUU



Carlos Ramírez
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

Una oleada de huelgas y movilizaciones recorre toda la geografía estadounidense. Miles de trabajadores a lo largo y ancho del país están exigiendo aumentos salariales (la inflación alcanza en estos momentos el 5,4%), más días de descanso para acabar con las jornadas laborales interminables, más prestaciones sociales, etc.

Este notable incremento de la actividad huelguística se produce particularmente en el sector manufacturero, entre las plantillas de los Gobiernos locales, en la construcción, la minería, la logística, la hostelería y una larga lista de servicios.

Es difícil conocer el dato real ya que la estadística elaborada por el Gobierno federal solo recoge los paros laborales que afectan a empresas de más de mil empleados. Según la Universidad Cornell, ha habido 255 paros en lo que va de año, 44 de ellos solo en octubre (*El Confidencial*, 24/10/21).

Los trabajadores muestran determinación para vencer la resistencia patronal

Los sindicatos estadounidenses, comprometidos con intentar garantizar la paz social y siempre dispuestos a colaborar con los empresarios, están siendo sometidos a una gran presión por parte de una clase obrera que en numerosas ocasiones supera los límites que los dirigentes sindicales quieren imponer.

Los 1.400 operarios de la empresa de cereales Kellogg's en Battle Creek (Michigan), Omaha (Nebraska), Lancaster (Pensilvania) y Memphis (Tennessee) permanecen en huelga desde el pasado 5 de octubre y realizan piquetes de forma periódica exigiendo mejoras laborales; también han parado, desde el 14 de octubre, 10.000 empleados de las plantas de maquinaria agrícola de John Deere en Iowa, Illinois, Kansas, Colorado y Georgia. En la misma situación se encuentran los 2.000 del Mercy Hospital de Buffalo (Nueva York) y los 31.000 de la empresa de servicios sanitarios Kaiser Permanente han votado ir a la huelga... La lista es muy larga.

Los capitalistas, pese a los grandes beneficios que están acumulando¹, ofrecen una dura resistencia. Sin embargo, los trabajadores están oponiendo también una fuerte determinación y están logrando importantes victorias, que a su vez animan a otros sectores a luchar.

Los obreros de Frito-Lay (fabricante de Cheetos, Doritos, Ruffles, etc.), subsidiaria de Pepsico en Kansas, después de 19 jornadas de huelga lograron un significativo aumento salarial y más tiempo libre. En la fábrica de snacks Nabisco, perteneciente al grupo Mondelez International, tras cinco semanas en huelga, la empresa se vio obligada a abandonar un plan para introducir la doble escala salarial. Uno de los casos más emblemáticos está siendo el de los técnicos de sonido y operadores de cámara de Hollywood. Unos 60.000 operarios, a través de su sindicato IATSE², aprobaron un paro a partir del 18 de octubre; antes de esa fecha la empresa ofreció serias concesiones (incrementos del tiempo libre y de descanso y aumentos salariales). El sin-



dicato ha firmado un preacuerdo con la patronal del sector que está pendiente de ser ratificado por unas bases que lo han recibido con frialdad.

Ofensiva obrera para conquistar empleos decentes

Tras el parón provocado por la pandemia, millones están negándose a aceptar muchos de los empleos basura que les ofrecen. Más de diez millones de empleos estaban vacantes a finales de agosto de este año, según cifras oficiales. Liz Schuler, presidenta del AFL-CIO, explicaba gráficamente las razones de esta supuesta falta de mano de obra: "La pandemia realmente evidenció las inequidades de nuestro sistema y la gente trabajadora se está negando a volver a trabajos cutres que ponen sus vidas en peligro" (*El Confidencial*, 24/10/21).

Una gran mayoría de familias obreras estadounidenses se encuentran al límite. La presión cotidiana que sufren alcanza niveles críticos. En estas condiciones son muchos quienes recurren a los fármacos para resistir el ritmo. Cada vez son más los que se rebelan contra esta situación.

Kellogg's obliga a hacer turnos de 12 horas los siete días de la semana; muchos obreros de Frito-Lay no habían recibido un aumento salarial en diez años, mientras se veían obligados a trabajar 84 ho-

ras a la semana a altas temperaturas (*al-dianews.com/es*, 27/10/21), solo la lucha ha logrado aliviar esta situación; los técnicos de sonido y operadores de cámara de Hollywood tienen que lidiar con jornadas de rodaje maratonianas, que oscilan entre las 12 y las 14 horas, sin pausas para comer y sin días de descanso.

Los derechos laborales en los EEUU no han dejado de retroceder en las últimas décadas. Las vacaciones pagadas son un "lujo" al alcance de una minoría; no hay baja remunerada por maternidad, únicamente las empresas de más de 50 empleados tienen la obligación legal de guardar a la mujer su puesto durante doce semanas; ningún trabajador tiene seguro médico público, teniendo que recurrir a uno privado por su cuenta o a través de su empresa, etc.

El 44% de asalariados estadounidenses entre 18 y 64 años (53 millones de personas) ganan unos 10 dólares a la hora, 18.000 anuales, con lo que apenas pueden subsistir, y un 40% se ve forzado a tener un empleo a tiempo parcial (*El blog salmón*, 30/01/20). El Salario Mínimo Federal es de 7,25 dólares desde hace doce años. Y aunque hay estados en los que es mayor, rara vez supera los diez dólares.

La presión obrera está siendo muy intensa, lo que está provocando que las empresas se vean obligadas a hacer algún gesto. Compañías de paquetería como

Amazon, Target y UPS o grandes cadenas comerciales como Walmart, que necesitan contratar a cientos de miles para la temporada de navidad, están ofreciendo incrementos salariales y mejoras laborales.

Décadas de legislación antiobrero y antisindical, de colaboración entre sindicatos y capitalistas³ han hundido las condiciones laborales a la vez que los beneficios empresariales han superado récords año tras año. En un contexto de enorme polarización social, con decenas de millones de hombres, mujeres y jóvenes participando en la lucha social, cada vez sectores más amplios empiezan a decir basta y a exigir poder trabajar y vivir dignamente. Este caldo de cultivo provocará que, más pronto que tarde, la clase obrera estadounidense recupere plenamente sus grandes tradiciones reivindicativas y de combate por su emancipación social.

1. Por ejemplo, Kellogg's obtuvo unas ganancias el primer trimestre en América del Norte de 379 millones de dólares, un 3,6% más que en el primer trimestre de 2020 y los ingresos de Amazon han subido un 15,3%, hasta 110.800 millones, con unos beneficios en el tercer trimestre de 2021 de 3.200 millones.
2. Alianza Internacional de Empleados de Cine, Teatro y Televisión.
3. Una de sus consecuencias ha sido el debilitamiento histórico de los sindicatos. La tasa actual media de sindicalización en EEUU es del 10,3% frente al de 20,3% de 1983.



► izquierdarevolucionaria.net

Chile ante las elecciones más reñidas en treinta años

Impulsar la movilización de masas con un programa socialista!





Crisis de abastecimiento en el Reino Unido

El Brexit capitalista no ha resuelto nada



Izquierda
Revolucionaria

La entrada en vigor de los acuerdos entre el Reino Unido y la Unión Europea para completar el Brexit han desembocado en una situación inesperada para el Gobierno reaccionario de Boris Johnson. La escasez y desabastecimiento de numerosos productos y mercancías esenciales han servido imágenes impensables para una potencia capitalista.

Decenas de miles de trabajadores de la UE y extracomunitarios abandonaron el país en las últimas semanas ante la avalancha de restricciones al empleo aprobadas por Johnson. La consecuencia inmediata ha sido una falta crónica de camioneros que ha desembocado en cierres intermitentes de gasolineras y supermercados con estanterías vacías.

Para responder a la crisis el Gobierno ha tenido que recurrir al ejército, y desde octubre cientos de militares conducen camiones cisterna para asegurar el suministro de combustible.

La decadencia del capitalismo británico

Johnson ha tratado de quitar gravedad al asunto presentándolo como una consecuencia coyuntural de la culminación del Brexit. La prensa burguesa europea le responsabiliza en exclusiva y pinta este caos como un merecido “castigo” a la población por haber votado “Sí” al abandono de la Unión Europea.

Si bien es cierto que el nacionalismo económico y el proteccionismo no son una solución a las contradicciones que sufre el capitalismo y solo contribuyen a agravarlas aún más, la realidad es que los problemas de fondo de la economía británica vienen de atrás. La brusca subida de los precios de la energía, materias primas y

suministros industriales básicos, que está disparando la inflación, complican la situación, y han llevado a los empresarios del acero, la industria química o el cemento a advertir que si no reciben ayudas públicas que compensen el descenso de sus exportaciones a la UE cerrarán factorías y despedirán trabajadores.

Dado el alto grado de integración de la economía británica con la mundial, especialmente con la UE, era inevitable que el Brexit trajese problemas de este tipo. Es una de las economías más internacionalizadas del mundo. Su comercio exterior aportaba en 2020 el 63% de su PIB, frente al 35% de Japón o el 22% de Estados Unidos. Según datos oficiales de 2019, el 43% de sus exportaciones y el 52% de sus importaciones eran con la UE.

Precisamente por causa de esta fortísima integración económica, un sector de la oligarquía financiera británica se opuso al Brexit e hizo todo lo posible por evitarlo. Pero no pudieron imponerse a un malestar social profundo, alimentado por décadas de retrocesos en los derechos sociales y laborales conquistados por la clase trabajadora tras la Segunda Guerra Mundial.

Pronto quedó claro que ni un Brexit en líneas capitalistas ni la permanencia en la UE ofrecían una salida para la población trabajadora.

Perspectivas inciertas

Lo acordado con la UE era que Irlanda del Norte continuaría en el mercado único europeo y que, por tanto, no habría frontera o restricción para el movimiento de personas y mercancías entre la república de Irlanda y las seis provincias bajo dominio británico. El equilibrio inestable alcanzado en Irlanda del Norte tras los Acuerdos de Viernes Santo de 1998 exigía que no se interrumpiera la

creciente integración entre las dos partes de Irlanda.

La consecuencia es que la frontera económica con la UE se trasladaba al interior del territorio del Reino Unido, levantando una barrera en el comercio entre Irlanda del Norte y el resto del país. Este acuerdo soliviantó al sector unionista de Irlanda del Norte y a los empresarios británicos, que ven restringidos los intercambios en lo que formalmente sigue siendo su país.

Lo que subyace es que Irlanda del Norte ha dejado de gravitar económicamente en torno al Reino Unido. La decadencia del capitalismo británico unida al enorme salto económico de la república de Irlanda han cambiado la situación. Poco a poco Irlanda del Norte se desgaja, y por mucho que un sector de la clase dominante británica patalee, el proceso parece imparable.

Ese sector que añora los buenos tiempos en que Reino Unido era la principal potencia militar e industrial del mundo vio en el Brexit una oportunidad de recuperar el esplendor perdido. Su opción era salir de la UE para firmar un tratado de libre comercio y una sólida alianza militar con Estados Unidos. El creciente enfrentamiento entre EEUU y China les facilitó el terreno. Trump alentó el Brexit, y con la intención de debilitar a la UE y levantar un muro de contención frente a Rusia propició la creación de un bloque de aliados europeos encabezado por el Reino Unido y del que formarían parte Polonia, Hungría y Ucrania.

Londres ha sido uno de los más grandes centros financieros mundiales. En el pasado, el dominio británico sobre Hong Kong proporcionó enormes ventajas al capitalismo británico. Todavía hoy conserva una posición relevante y los servicios financieros aportan el 6% del PIB británico y alrededor del 10% de sus ingresos fiscales. Pero el desarrollo del ca-

pitalismo chino ha ido minando esa posición financiera privilegiada.

El sector financiero ha sufrido la misma acelerada decadencia que afecta al resto del capitalismo británico. En 2006, las compañías que cotizaban en la bolsa londinense representaban el 10,4% de la capitalización bursátil global y el 36% de la europea. Hoy, son el 3,6% y el 22% respectivamente y, lo que es peor, las tecnológicas aportan solo el 20% del valor cotizado en Londres, frente al 40% que aportan en Wall Street.

Ante esta debilidad británica, la burguesía norteamericana no ha tenido ni el más mínimo interés en concretar la oferta de tratado de libre comercio. Trump y ahora Biden reservan a Reino Unido el papel de ariete auxiliar en su confrontación con China y en la carrera armamentística que acompaña este conflicto interimperialista.

El laborismo bajo control de la derecha blairista

Corbyn cedió a las presiones de la derecha blairista en todos los asuntos de fondo, y su política ante el Brexit no hizo más que debilitar su posición. Apoyó la permanencia en la UE como el “mal menor”, defendió un segundo referéndum que pudiese revertir la decisión de salir de la UE y, cuando el Gobierno conservador se sumía en el caos por sus divisiones internas, reclamó una política de unidad nacional. Así, la derecha laborista, apoyándose en la burocracia sindical, aprovechó la debilidad de Corbyn para expulsarlo del partido y afianzar las posiciones más reaccionarias del *blairismo*.

Para hacer frente a una situación de crisis tan profunda solo hay un camino: defender un programa socialista y llevarlo a la práctica mediante una movilización social formidable.

Al caos desencadenado por el Brexit se ha unido el terrible sufrimiento causado por la criminal gestión del coronavirus por parte del Gobierno, responsable directo de miles de muertes, como señala un reciente informe del Parlamento.

A pesar de todo, Johnson no parece temer por el futuro de su Gobierno. La pasividad de los sindicatos y el laborismo le dan oxígeno, aunque se vea obligado a realizar algunas concesiones de poca monta para apuntalar la paz social, como subir un 6,6% el salario mínimo a partir de abril. Pero considerando el precio desorbitado de vivienda, alimentos, transporte, y la privatización de los servicios públicos, este incremento es una gota en un océano.

Es evidente que los conservadores británicos no se han hecho progresistas. Al contrario. Saben que se sientan sobre un polvorín de descontento social y tratan de desactivar, o al menos retrasar, una posible explosión. Los recientes triunfos de candidatos de la izquierda en importantes sindicatos son una señal de que la furia crece. Pero esa furia hay que transformarla en organización consciente, en militancia revolucionaria y en movilización en las calles.

Puedes leer el artículo completo en izquierdarevolucionaria.net



**IZQUIERDA
REVOLUCIONARIA**

Afiliate a **IZQUIERDA REVOLUCIONARIA** y construye con nosotros las fuerzas del marxismo internacional

ANDALUCÍA: Cádiz 682 276 436 · Córdoba 619 033 460 · Granada 616 893 592 · Huelva 695 618 094 · Málaga 952 276 563 · Sevilla 600 700 593 · ARAGÓN: Zaragoza 640 702 406 · ASTURIAS: 686 680 720 · CASTILLA-LA MANCHA: Guadalajara 949 201 025 · Puertollano 650 837 265 · Toledo 699 956 847 · CASTILLA Y LEÓN: Salamanca 653 699 755 · CATALUNYA: Barcelona 933 248 325 · Tarragona 660 721 075 · EUSKAL HERRIA: Araba 945 231 202 · Bizkaia 664 251 844 · Gipuzkoa 685 708 281 · Nafarroa 635 919 738 · EXTREMADURA: 638 771 083 · GALIZIA: A Coruña 651 582 656 · Compostela 679 500 266 · Ferrol 626 746 950 · Ourense 604 024 366 · Vigo 636 217 248 · MADRID: 914 280 397 · PAÍS VALENCIA: 685 098 482

www.izquierdarevolucionaria.net • contacto@izquierdarevolucionaria.net • [f](https://www.facebook.com/izquierdarevolucionaria) [i](https://www.instagram.com/izquierdarevolucionaria) [t](https://www.tiktok.com/@izquierdarevolucionaria) [y](https://www.youtube.com/channel/UC...) @IzquierdaRevol



Antonio García Sinde
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

La mayoría de las encuestas coinciden en que, muy probablemente, a la segunda vuelta de las presidenciales de abril de 2022 pasarán el liberal Emmanuel Macron y un candidato de la extrema derecha que podría ser Marine Le Pen.

Ya en 2002 el candidato de la derecha tradicional, Jacques Chirac, y el ultraderechista Jean-Marie Le Pen se enfrentaron. Pero en esta ocasión hay dos factores nuevos que merecen nuestra atención.

En 2002 se venía de un Gobierno del Partido Socialista encabezado por Lionel Jospin que realizó privatizaciones masivas, creando un fuerte malestar social que debilitó electoralmente a la izquierda. Pero en 2022 las elecciones tendrán lugar tras cinco años de presidencia derechista de Macron y una agenda de intensos recortes que se ha enfrentado a movilizaciones sociales de envergadura, incluyendo la rebelión de los “chalecos amarillos”. ¿Cómo es posible que la izquierda no sea capaz de canalizar este descontento y pueda sufrir una aparatosa derrota?

El ascenso de Éric Zemmour subraya el peligro

El segundo factor que caracteriza estos comicios es que otro candidato ultraderechista, Éric Zemmour, tendría opciones de superar a Le Pen. Esta división en la extrema derecha, lejos de debilitarla electoralmente, la refuerza.

Su intención de voto ha aumentado en casi cinco puntos desde que ambos compiten por el mismo electorado.

Zemmour ha centrado su discurso en lo que llama “soberanía nacional”, es decir, un nacionalismo económico extremo y un ataque despiadado a inmigrantes y refugiados, con argumentos que recuerdan a las campañas antisemitas del zarismo y del nazismo. Hace suyas las teorías conspiratorias que presentan a los inmigrantes como un ejército cuyo objetivo es destruir la civilización francesa.

También dirige su odio hacia mujeres y población LGTBI, difundiendo los infundios reaccionarios más repugnantes, como que las feministas quieren “castrar a los hombres” o los homosexuales adoptar niños para violarlos.

Que con este tipo de mensajes alcance una intención de voto del 18% es un indicador de la profundidad de la crisis social francesa, que golpea con dureza a una pequeña burguesía rural y urbana que siempre jugó un papel importante en la vida política del país.

Esa pequeña burguesía vive atenazada entre el miedo a la clase obrera y la revolución, y la incertidumbre de perder su patrimonio en medio de una crisis económica furiosa.

En los años treinta del siglo pasado las capas medias golpeadas por la crisis se convirtieron en la base social del fascismo y del colaboracionismo nazi. En 1968, aterrorizados por el gran levantamiento obrero y juvenil de mayo, un amplio sector de ellas se movilizó en defensa de la propiedad y el orden apoyando el programa bonapartista del general De Gaulle.

La crisis de 2008 ha vuelto a golpear a la pequeña burguesía, tanto económicamente como en sus perspectivas de ascenso social y en su orgullo nacional. Estos pequeños propietarios dirigen su rabia contra el orden financiero internacional y contra los inmigrantes, que suponen

La extrema derecha avanza en Francia sobre las ruinas de la izquierda reformista



una “carga” para las finanzas públicas. Por eso ponen sus ojos en quienes, como Zemmour, hablan enérgicamente contra “las élites” y ofrecen la recuperación de un supuesto pasado esplendoroso. El *trumpismo* francés, con sólidas raíces sociales, irrumpe en la escena con fuerza.

El colapso de la socialdemocracia y del neorreformismo

Las palabras de León Trotsky en *¿Adónde va Francia?* conservan toda su vigencia: “Los pequeñoburgueses desesperados ante todo ven en el fascismo una fuerza combativa contra el gran capital, y creen que, a diferencia de los partidos obreros que trabajan solamente con la lengua, el fascismo utilizará los puños para imponer más ‘justicia’ [...]”. Es falso, tres veces falso, afirmar que en la actualidad la pequeña burguesía no se dirige a los partidos obreros porque teme a las ‘medidas extremas’. Por el contrario: la capa inferior de la pequeña burguesía, sus grandes masas, no ven en los partidos obreros más que máquinas parlamentarias, no creen en su fuerza, no los creen capaces de luchar, no creen que esta vez estén dispuestos a llevar la lucha hasta el final”.

Y la historia vuelve a repetirse. La renuncia de la izquierda a luchar por una alternativa revolucionaria es lo que echa a los sectores medios —y a capas atrasadas y desesperadas de la clase obrera— en brazos de la extrema derecha.

La socialdemocracia ha gobernado en Francia mucho tiempo. En 1981, en alianza con el Partido Comunista francés, Mitterrand ganó con un programa que incluía importantes nacionalizaciones y reformas para la clase trabajadora. Pero ese Gobierno no fue capaz de enfrentar las presiones de la burguesía y echó marcha atrás en todas las reformas iniciadas.

Desde entonces, el PS ha aplicado políticas indistinguibles de las de la derecha.

Fue el fracaso de la coalición PS-PC lo que allanó el terreno al Frente Nacional. En 1986 consiguió entrar en el parlamento y, aunque pronto volvió a ser una fuerza extraparlamentaria, conservó un importante porcentaje de votos y fuerte presencia municipal.

Las grandes movilizaciones obreras de principios de los años 2000, junto con las campañas antifascistas, debilitaron el apoyo al FN. Pero las consecuencias de la crisis de 2008 volvieron a ofrecerle grandes posibilidades. El crecimiento del desempleo y la destrucción industrial por las deslocalizaciones permitieron al Frente Nacional avanzar en zonas tradicionales de la izquierda agitando un programa chovinista.

En 2011, Marine Le Pen intentó desligar al partido de los rasgos más claramente fascistas y racistas, e incluso cambió el nombre a Rassemblement National. Sus intentos de sustituir a la derecha tradicional en crisis remozándose con un toque de modernidad, le granjeó un éxito indiscutible: en 2017 disputó a Macron la segunda vuelta de las presidenciales. Pero en su giro hacia la “moderación” dejó un flanco abierto a su derecha, que en un momento de aguda polarización social y tras la pandemia ha aprovechado Zemmour.

El fracaso de la coalición de la izquierda, y de los sucesivos Gobiernos socialistas, tuvo también como resultado la pulverización electoral de la izquierda reformista tradicional. La candidata socialista, Anne Hidalgo, tiene una intención de voto del 5% y el candidato comunista apenas roza el 2%.

La crisis de 2008 propició en Francia, igual que en otros países, el surgimiento de una alternativa formalmente a la iz-

quierda de la socialdemocracia, la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon. Pero lejos de proponer un programa socialista ha hecho suya la retórica de la “soberanía nacional” y ataca a la inmigración en nombre de la defensa de los derechos sociales de los trabajadores autóctonos. Lejos de debilitar a la extrema derecha, le pavimenta el camino.

A pesar de ser el mejor situado entre los candidatos de la izquierda, las encuestas no le dan a Mélenchon más del 10%. Aunque consiga unir los votos del resto de la izquierda y de los ecologistas apenas llegaría al 30%.

La experiencia de los años treinta es contundente. Solo con un programa que apunte al corazón del sistema capitalista y proponga su transformación revolucionaria será posible levantar una izquierda creíble y con capacidad para enfrentar a la extrema derecha.

Visita nuestra web

www.izquierdarevolucionaria.net



El gran negocio político del “todo es ETA”

o la hipocresía de los que jamás han pedido perdón por los crímenes de la dictadura



Ezker Iraultzailea
(Izquierda Revolucionaria
en Euskal Herria)

El 18 de septiembre, Arnaldo Otegi (EH Bildu) y Arkaitz Rodríguez (Sortu) leyeron una histórica declaración frente al Palacio de Aiete (Donostia) dirigiéndose a las víctimas causadas por la violencia de ETA: “sentimos su dolor, y afirmamos que el mismo nunca se debió de producir”. Estas palabras, como era de esperar, han sido recibidas con un estruendo desde las filas de la reacción. Los políticos y las organizaciones que jamás han pedido perdón por los crímenes de la dictadura franquista, que han dado cobijo a reconocidos represores, responsables de torturas, fusilamientos y asesinatos de trabajadores y militantes de la izquierda, siguen haciendo de ETA una estrategia política cuando esta organización ya no existe.

A una década del abandono de las armas, y su posterior disolución, la derecha española sigue insistiendo en su letanía. No se trata de un aspecto coyuntural o de oportunismo. El recrudecimiento de la ofensiva contra los derechos democráticos desde las instancias dirigentes del aparato del Estado es la mejor prueba de que se trata de una política de largo alcance.

Tras años de persecución sin tregua contra el movimiento de liberación nacional catalán y de una represión salvaje contra un pueblo que votó masivamente a favor de la república, de encarcelamientos y sentencias infames que han sido incluso desautorizadas por instancias europeas, los montajes policiales y los “juicios-farsa” siguen siendo una herramienta recurrente. Ya sea contra mili-

tantes de la izquierda abertzale en Euskal Herria, desde la causa contra los jóvenes de Altsasu o los recientes ataques a las organizaciones juveniles Gazte Koordinadora Sozialista e Ikasle Abertzaleak, contra activistas de la izquierda combativa en el resto del Estado, contra la PAH y contra el movimiento feminista, alcanzando a diputados que se han destacado por su apoyo a los movimientos sociales, como el caso de Alberto Rodríguez de Podemos... el franquismo sigue vivo y con un poder que se acrecienta gracias a la pasividad, cuando no la colaboración, de los dirigentes del PSOE.

De esos polvos vienen estos lodos

El espectáculo del PP y Vox acusando al Gobierno PSOE-UP de “colaborar con etarras” y exigiendo que los dirigentes de EH Bildu pidan perdón se ha convertido en una pieza política habitual. Lo verdaderamente repugnante del caso es que este circo lo organiza el mismo partido fundado por seis ministros franquistas, incluido Manuel Fraga cuya implicación directa en la matanza del 3 de marzo en Gasteiz está sobradamente probada. O Vox, que reivindica la dictadura, ensalza el programa del neofascismo, disemina su discurso machista, racista y homóforo día sí y día también y protege a una miríada de grupúsculos nazis especializados en violencia callejera.

La derecha española, todas y cada una de sus variantes, jamás ha pedido perdón. ¿Para qué hacerlo si se sienten impunes y amparados por el régimen del 78? Los políticos, jueces, militares, policías y funcionarios que no sufrieron ninguna condena por sus crímenes han

sabido transmitir el testigo a las nuevas generaciones de reaccionarios que siguen copando las altas esferas del aparato estatal.

Pero esto se lo debemos a la democracia capitalista que se fraguó durante la Transición con el beneplácito de los dirigentes reformistas del PSOE y del PCE. Ellos hicieron lo imposible por desmovilizar la calle, firmar un infame acuerdo de punto y final (la Ley de Amnistía de 1977), apuntalar a una monarquía impuesta por el dictador y negar el derecho de autodeterminación a Euskal Herria, Catalunya y Galiza. La responsabilidad de esta izquierda, ayer como hoy, sigue siendo formidable.

Y es que el PSOE no hace ningún asco a las campañas de la reacción cuando se trata de hablar de ETA. Un partido que diseñó las leyes que ilegalizaron Herri Batasuna, que aplaudió el encarcelamiento fraudulento de Otegi durante seis años, que se ha paseado de la mano con representantes del PP y Vox en Catalunya alentando la represión y el nacionalismo españolista más furioso... no tiene problemas de chapotear en el mismo lodo.

Así, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, respondía que la declaración de Aiete es “insuficiente” porque los dirigentes de EH Bildu deben condenar a ETA, pedir perdón y “pasar de las palabras a los hechos”. Resulta muy llamativo que los responsables del terrorismo de Estado de los GAL exijan perdón con tanta contundencia después de lo ocurrido durante las décadas pasadas. Ellos, incluido Felipe González, siguen negándose a reconocer su responsabilidad directa en la creación de los comandos parapoliciales que causaron decenas

de víctimas en Euskal Herria, y han movido todos los hilos necesarios para impedir una investigación seria que pueda establecer la verdad de la guerra sucia.

El PNV, el portavoz del gran capital vasco, también ha hecho gala de esta misma hipocresía. Al tiempo que sus dirigentes se suman de manera oportunista a manifestaciones de solidaridad con los presos, no han dudado en calificar el comunicado leído por Otegi de “corto e insuficiente”, y que estaba fuera de lugar plantear “que las causas del conflicto siguen todavía pendientes de resolver”. La burguesía vasca, que con tanta complacencia defendió las medidas represivas de Estado y que fue tan decisiva para levantar la arquitectura del régimen del 78, siempre coloca por delante sus intereses de clase, sus negocios y privilegios.

Los hechos desmienten el relato oficial

No es verdad que el final de ETA fuese el resultado de los éxitos de la represión policial y judicial. Esta es otra forma de manipular la historia para seguir justificando la perpetuación de un clima de excepcionalidad represiva contra el pueblo y la juventud vasca. La guerra sucia, la ilegalización, los macrojuicios y la cárcel nunca fueron una solución al conflicto ni podían acabar con la capacidad de operar de ETA. Tampoco perseguían ese objetivo. La prueba más evidente es la continuidad de esa represión y su extensión indiscriminada para criminalizar movimientos sociales que nada tienen que ver con ETA, tanto en Euskal Herria como en el resto del Estado.

No fueron el PP ni el PSOE o el PNV, tampoco la represión del Estado. Lo decisivo para poner fin a los 40 años de actividad armada de ETA fue el auge espectacular de la lucha de masas en Euskal Herria, en los territorios del Estado español y en el conjunto del mundo, marcado por el estallido de procesos revolucionarios en América Latina que acabaron con un periodo histórico de guerrillerismo. El colapso de la URSS y del estalinismo también cuarteó las bases ideológicas en las que se asentaba el programa estratégico de ETA, y generó un indudable desconcierto y desmoralización entre su capa dirigente más veterana.

Sin duda, el factor crucial fue que decenas de miles de activistas comprobaron que la actividad armada de una organización clandestina estaba completamente agotada como factor político progresi-





vo. Las acciones de los comandos no podían sustituir las movilizaciones de masas y las huelgas generales para alcanzar objetivos como el derecho de autodeterminación o la liberación de los presos, y se convertían en algo contraproducente: daban argumentos al Estado y a la clase dominante para incrementar la represión y propiciar el aislamiento de la izquierda abertzale.

La experiencia de Catalunya ha demostrado que son precisamente los métodos de lucha de masas, y la necesidad de defender dentro del movimiento un programa de clase, comunista, internacionalista, que sea capaz de unir las reivindicaciones de la liberación nacional con las consignas socialistas, la clave para poder avanzar contra un enemigo poderoso como es el Estado capitalista.

El Gobierno de coalición, los presos y EH Bildu

La burguesía española no ha renunciado a sus objetivos. Quiere aplastar a la izquierda abertzale, y la represión sigue siendo una herramienta que utiliza a fondo, aunque no es la única ni la más importante en estos momentos.

Desde 2011, cuando Rajoy llegó a La Moncloa, a cada paso de ETA para entregar las armas y disolver sus estructuras aumentaron la escalada represiva. Nada más producirse los primeros movimientos detuvieron y condenaron a varios dirigentes de la izquierda abertzale, entre ellos a Otegi¹. Acto seguido ilegalizaron Herrera, plataforma para la defensa de los presos vascos que planteaba actuar bajo vías exclusivamente políticas y legales, deteniendo a decenas de sus activistas. Pero todas las provocaciones, todo el sabotaje para impedir que esta decisión llegara a buen puerto se saldó con un fracaso para la derecha. ETA se disolvió, y el abandono de la actividad armada se refrendó por sus militantes y por una mayoría aplastante de la izquierda abertzale.

Con la llegada del Gobierno de coalición en 2020 se abre una nueva fase, marcada por dos elementos. Por un lado, el PSOE no ha renunciado a la represión, como ha demostrado sobrada-

mente en el conflicto catalán. Sus vínculos con el aparato del Estado son demasiado fuertes y sus compromisos con el régimen del 78 son tan evidentes, que sigue blandiendo la porra policial y judicial sin ambigüedad.

El ministro del Interior, Grande-Marlaska, señaló recientemente la posibilidad de reformar el Código penal para condenar los recibimientos y homenajes a presos. También ha defendido, a pesar de que ya no existe ETA, la política de dispersión carcelaria que vulnera la legislación internacional de derechos humanos². A pesar del fin de ETA, la Audiencia Nacional y otros tribunales siguen cerrando periódicos y webs como kalera-kalera por el hecho de informar sobre la vulneración de los derechos humanos de este colectivo y sus familiares.

Por otro lado, el PSOE ha desplegado una táctica de asimilación que pretende neutralizar la combatividad de la izquierda abertzale. Se trata de comprometerla en legitimar las políticas capitalistas del Gobierno, ofreciendo como anzuelo la resolución de la cuestión de los presos en un horizonte indefinido. Mientras tanto, el PSE-PSOE gobierna con el PNV en la CAV, siguiendo los dictados de la patronal y reforzando la agenda de recortes sociales que está empobreciendo a nuestro pueblo.

Recientemente, un vídeo filtrado con declaraciones de Otegi expuso crudamente la cuestión que mencionamos. Sus palabras, en el marco de un encuentro con activistas de la izquierda abertzale, fue-

ron claras: hay que apoyar a este Gobierno porque de eso depende la salida de los presos.

Otegi subrayaba una idea que está en la cabeza de millones de trabajadores en el conjunto del Estado: si cae este Gobierno en este momento, la alternativa es la derecha más reaccionaria y eso significaría un empeoramiento de la situación. Por supuesto, nadie que esté comprometido con la causa del socialismo y de la liberación nacional de nuestro pueblo quiere al PP y Vox en La Moncloa. Pero la pregunta es ¿cómo se puede evitar ese escenario? ¿Acaso las políticas del PSOE son un antídoto para frenar el ascenso de la reacción?

Pedro Sánchez, en respuesta a Otegi, se ha apresurado a decir solemnemente al PP y Vox que no negociará con EH Bildu la excarcelación de los 200 presos vascos a cambio del apoyo a los presupuestos. Es evidente que el PSOE no va a comprometerse con Otegi para nada sustancial, ni en las cuestiones sociales que afecten a los intereses del IBEX 35 y menos aún en cuanto a los presos. Un buen ejemplo es lo que estamos viendo respecto a Catalunya o a sus propios socios de coalición de Unidas Podemos.

Si hoy la reacción levanta cabeza es precisamente por las políticas procapitalistas que está aplicando el actual Gobierno de coalición, y por la estrategia de desmovilización y paz social planteada desde UP, con la colaboración de las direcciones sindicales de CCOO y UGT. Así, como ya estamos viendo, no solo

no se avanza, sino que se deja cada vez más espacio al PP y a Vox.

Todos los avances que se han conseguido contra las políticas penitenciarias de dispersión han sido fruto exclusivo de las masivas movilizaciones de los trabajadores y jóvenes de EH, que han estado al pie del cañón contra la ofensiva de la derecha españolista, pero también contra las maniobras de la patronal y la derecha vasca, el PNV. Aceptar o apoyar políticas antisociales de contrarreformas y recortes en las pensiones, en la sanidad y educación públicas... no va a terminar con la represión y la venganza, pero sí ayudarán a extender la misma desafección hacia la izquierda parlamentaria en Euskal Herria. Ese es el camino que ha seguido UP, y ya estamos viendo sus nefastas consecuencias.

Lo mismo se puede decir de tejer alianzas con el PNV. La última y masiva manifestación en Donostia en defensa de los presos no necesitaba de la participación del partido de los negocios vascos, que de esta forma se lava la cara después de las declaraciones vergonzosas de sus líderes tras el comunicado de Aiete y de la brutal represión de la Ertzaintza contra las movilizaciones obreras y sociales de los últimos meses.

La estrategia del "mal menor", tan reivindicada por UP o Syriza, ya ha demostrado sus resultados: más recortes, más precariedad, más represión. Para acabar con las políticas capitalistas y de venganza contra los presos, con el régimen del 78 y su represión, y para lograr ejercer el derecho de autodeterminación, la única salida es construir una alternativa que luche en las calles por la transformación socialista de la sociedad. Esta es la propuesta de los marxistas revolucionarios de la izquierda abertzale.



1. Hace menos de un año, el Tribunal Supremo decidía repetir el juicio de Bateragune por el cual Otegi y otros cuatro dirigentes de la Izquierda Abertzale pasaron más de seis años en la cárcel, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictaminara en 2018 que el proceso judicial no fue imparcial.

2. Grande-Marlaska: "¿Bildu? Todos los apoyos al programa de gobierno son bien recibidos".

Las concesiones del PSOE fortalecen a los franquistas



El cese de Alberto Rodríguez como diputado, decidido por la presidenta del Congreso cumpliendo con celeridad las órdenes del Tribunal Supremo, supone un gravísimo ataque contra los derechos democráticos y un nuevo paso en la campaña de criminalización contra los activistas de la izquierda.

Plegándose a las exigencias del juez Marchena, un magistrado vinculado estrechamente con los sectores más reaccionarios y ultraderechistas del PP, y que ya presidió el montaje judicial contra los dirigentes independentistas catalanes, el PSOE demuestra una vez más que es un sólido pilar del régimen del 78. Pero lo más increíble de este asunto nauseabundo, ha sido la puñalada traperera que Alberto Rodríguez ha recibido de diferentes líderes de Unidas Podemos, empezando por Yolanda Díaz y Alberto Garzón, que le han abandonado a su suerte renunciando a proponer ningún tipo de movilización y pidiendo rebajar el “ruido”. Los sillones ministeriales pesan mucho más que denunciar la colaboración infame del PSOE con la derecha incrustada en el aparato estatal.

El Poder Judicial echa al “rastas” entre vítores de Vox y PP

Tras una farsa judicial carente de pruebas y sostenida con el único testimonio de un policía simpatizante de la ultraderecha, contradiciendo incluso las propias imágenes que existen del supuesto incidente, y a pesar de que la pena de un mes y 15 días ha sido sustituida por una multa que el diputado abonó inmediatamente... Meritxell Batet, en contra del crite-

rio inicial de los servicios jurídicos del Congreso¹, ha robado literalmente el acta de diputado a Alberto Rodríguez. Un atropello antidemocrático que ha dejado a 64.000 electores sin su representante.

Esta es la “democracia” que existe en el Estado español, donde un tribunal plagado de franquistas puede forzar la destitución de un representante de la “soberanía nacional” sin pestañear. Un aviso a navegantes para cualquier activista social, sindicalista o militante de izquierdas que luche en las calles contra el régimen del 78, y que mañana pueda ser elegido para un cargo parlamentario.

Con esta capitulación del PSOE, la derecha y la extrema derecha han salido en tromba para celebrar la victoria. Han echado al “rastas” que violaba los “códigos de etiqueta” de un lugar que solo la casta tiene derecho de ocupar, al que según Celia Villalobos podía traer piojos, se han sacudido al “pateador de policías” y al “delincuente” de Podemos, tal como lo han calificado los periodistas de la caverna. Estos reaccionarios, acosados por constantes casos de corrupción, que han saqueado sin inmutarse las cuentas públicas, que protegen la fortuna fraudulenta del Emérito y poseen cuentas en paraísos fiscales, los campeones del latrocinio tienen el cinismo de justificar esta decisión “porque nadie está por encima de la ley”.

Pero la actuación del Poder Judicial y del Tribunal Supremo no se ha limitado únicamente a arrebatar el acta de diputado a Alberto Rodríguez. Cuando han sido criticados por la ministra de UP, Ione

Belarra, han tardado minutos en emitir un durísimo comunicado público denunciando que las opiniones de esta “exceden absolutamente el derecho a la libertad de expresión”². Otra vez volvemos a confirmar que este poder judicial, que no se somete a ningún tipo de elección democrática por parte de la ciudadanía, decide quién puede seguir o no siendo diputado, y qué críticas son o no aceptables en el marco de la libertad de expresión.

Resulta un auténtico chiste oír hablar de la “independencia del Poder judicial”, o de la necesidad de “no judicializar” la política, cuando es esta casta la que con sus decisiones trata de condicionar la política en el Estado español, al margen de cualquier aritmética parlamentaria salida de las urnas. Así ocurrió hace unas semanas con la orden de detención contra Puigdemont, con el objetivo de dinamitar la mesa de diálogo, y así está ocurriendo ahora con Alberto Rodríguez.

Estamos ante decisiones que nos aproximan hacia un tipo de Estado autoritario, donde un puñado de magistrados dispone de un poder incontestable, muy superior al del propio Congreso. La cuestión es por qué esta casta de magistrados, militares y policías fascistas, que han heredado sus posiciones en las altas esferas de padres, abuelos y familiares, igual de reaccionarios que ellos y que lograron sus galones y ascensos bajo la dictadura, si-

guen actuando con tanta impunidad. Una lógica implacable que solo se explica por la colaboración y connivencia de los dirigentes del PSOE y de otras formaciones que hicieron posible una Transición política que fue de todo menos modélica.

Esos polvos son los que traen los actuales lodos. Este aparato es una amenaza para la democracia y para la clase obrera. Y lo está demostrando desde hace muchos años, contra el pueblo vasco y catalán, contra los derechos fundamentales de expresión, manifestación y organización, contra las miles de familias que expulsa de sus viviendas cada año, contra los cientos de miles de despidos que ha sancionado, o las sentencias machistas y homófobas que sigue dictando.

El PSOE extiende una alfombra roja a la extrema derecha

Esta grave actuación, que fortalece y llena de confianza a la extrema derecha y a la reacción, ha sido posible gracias a la colaboración y plena implicación de la dirección del PSOE y de Pedro Sánchez. Cerradas las viejas heridas tras el 40º Congreso, escenificado con el abrazo entre Pedro Sánchez y Felipe González, se trata de demostrar de nuevo su fiabilidad como partido del régimen ante la clase dominante, la patronal y el IBEX 35.

No es casualidad que esta ofensiva coincida con el conflicto en torno a la derogación de la reforma laboral o con los acuerdos entre PSOE y PP de cara a renovar el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y, muy probablemente, en un futuro cercano, el Consejo General del Poder Judicial. El mejor ejemplo es la renovación del TC, donde han cedido dos de los cuatro puestos a magistrados del PP cercanos al aznarismo, uno de ellos colaborador de FAES. La dirección del PSOE dirige con mano firme el Gobierno, imponiendo su voluntad en todos los aspectos fundamentales que afectan a la estabilidad del régimen y a los intereses del IBEX 35, dejando a UP el papel de comparsa de izquierdas.

La exigencia de que Nadia Calviño, representante del gran capital en el Con-



sejo de Ministros, participe en la negociación de la reforma laboral tiene un solo objetivo: que sus aspectos fundamentales no se deroguen. Y para ello cuenta con la ayuda del comisario de Economía de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, que aterrizó casualmente esta semana en Madrid para señalar que “las decisiones sobre estas reformas deben cumplir el marco de lo que hemos pactado en Bruselas”³. Es decir, que no se derogue. Por otro lado, pensar que la CEOE va a firmar la derogación de la reforma laboral, fiándolo todo al acuerdo entre los agentes sociales, resulta entre ingenuo y ridículo.

Tal y como ha ocurrido con otros proyectos estrella de UP, la eliminación de la reforma laboral quedará en agua de borrajas. Como la reciente ley de vivienda, con mil vericuetos legales que permitirán a los especuladores esquivarla, postergándose su aplicación 18 meses desde su aprobación, es decir, para el año 2024, tras unas nuevas elecciones que podría ganar la derecha⁴. Y lo mismo podemos decir de la contrarreforma de las pensiones, que ha endurecido las prejubilaciones; del famoso Ingreso Mínimo Vital, que ya ha quedado en el olvido; o de la subida de la luz y el gas, que continúa su escalada sin control después de los acuerdos firmados con los grandes monopolios del sector.

La debilidad invita a la agresión. ¿Hacia dónde va Unidas Podemos?

Tras casi dos años de Gobierno, la tesis defendida por Pablo Iglesias y Unidas Podemos de que la entrada en el Ejecutivo empujaría al PSOE hacia la izquierda ha sido desmentida por los hechos. El PSOE no ha dejado de escorarse cada vez hacia la derecha, incumpliendo incluso las limitadas promesas arrancadas por UP en el acuerdo de investidura. Algo que explica la plena sintonía de Pedro Sánchez y su Gobierno con la patronal y el IBEX 35.

Toda la acción de UP está quedando reducida a mera propaganda. Una propaganda que no deja de beneficiar al PSOE. Además, la renuncia de UP a dar la batalla en las calles, garantizando a toda costa la paz social en connivencia con CCOO y UGT, los coloca en la peor posición frente a los embates de la reacción y las maniobras del PSOE. Una situación que, como se ha visto en el caso de Alberto Rodríguez, los está condenando a una absoluta parálisis y a un creciente descrédito. Es necesario rectificar, cambiar el rumbo y salir del Gobierno, pasando a una contundente oposición de izquierdas.

Pablo Iglesias, Yolanda Díaz y los dirigentes de Unidas Podemos siguen justificando la coalición para evitar “que gobierne la ultraderecha”, dando por hecho que su salida tiene que significar convo-

car nuevas elecciones. La actuación contra Alberto Rodríguez ha demostrado lo lejos que puede llegar el PSOE. La lamentable y vergonzosa actuación de Yolanda Díaz y Alberto Garzón mostrando una falta completa de empatía y solidaridad con Alberto Rodríguez, su llamada a no generar “ruido” y “rebajar la tensión”, lejos de situar a UP en una posición de fuerza frente a un socio de Gobierno que actúa como Al Capone, expone aún más su debilidad.

Contra la represión y la extrema derecha, ¡es necesario levantar una alternativa revolucionaria!

Esta política de constantes concesiones lo único que hace es llenar de confianza a la base de la extrema derecha y de la reacción. Primero echaron a Pablo Iglesias, y ahora han hecho lo mismo con el Alberto Rodríguez, y además sin consecuencias.

La única alternativa contra esta ofensiva es volver a aquello que convirtió a Podemos en una fuerza que hizo temblar al régimen del 78 y que llenó de temor los despachos del IBEX 35: la fuerza del 15M, de las marchas de la dignidad, de las mareas, de la movilización consciente y contundente en las calles. Pero los actuales líderes de UP, y sus consejeros mediáticos, están volviendo a desaprovechar esta oportunidad para enfrentar a la extrema derecha. No combatir, no luchar, no responder, nunca es una alternativa. La experiencia no deja de demostrarlo.

Nos jugamos mucho. Unidas Podemos y también el resto de la izquierda

parlamentaria, ERC y EH Bildu, no pueden dejar pasar por alto este nuevo ataque. Es necesario convocar movilizaciones, y enfrentar mediante la lucha a estos elementos que hoy destituyen a un diputado, mañana encarcelan a activistas, y pasado se lanzarán a ilegalizar partidos y organizaciones de izquierdas.

Es necesario sacar las conclusiones de por qué se ha llegado hasta aquí. Aquellos que planteaban “tomar el cielo por asalto” se retiran, renuncian, se lamentan, pero millones de jóvenes y trabajadores condenados a la precariedad permanente, la falta de vivienda, y la ausencia de cualquier futuro no podemos hacerlos. El capitalismo y el régimen del 78 sufren una profunda crisis, pero no caerán solos. Necesitan ser enviados al basureiro de la historia, y para lograrlo la organización, la movilización y las ideas del marxismo son imprescindibles.

¡Únete a Izquierda Revolucionaria!

1. Marchena exigió a Batet cumplir la sentencia sin concretar como cumplirla, es decir, sin señalar explícitamente que había que retirar el acta de diputado a Alberto Rodríguez, aunque insinuando tácitamente que había que cesarlo (Las dudas jurídicas se ciernen sobre el caso sin precedentes de Alberto Rodríguez, elpais.com, bit.ly/3GVAAGT).
2. Comunicado de la Comisión Permanente del CGPJ: twitter.com/PoderJudicialEs/status/1451629004465782788.
3. Paolo Gentiloni: “La reforma laboral y la de pensiones deben cumplir lo pactado en Bruselas sobre el plan español de recuperación” (elpais.com, bit.ly/2YcUmno).
4. El Ejecutivo aplaza a la próxima legislatura los límites al alquiler para grandes caseros (elpais.com, bit.ly/3mAayHI).



¡LOS DERECHOS SE CONQUISTAN LUCHANDO!

NO



El Gobierno debe garantizar el derecho real al aborto

VIENE DE LA CONTRAPORTADA

Es decir, ¿que da la casualidad de que todos los objetores de conciencia han ido a parar al sistema público y todos los no objetores al privado!? Basta ya de tomarnos por idiotas. Tal como explicaba a *Público* Guillermo González Antón, presidente de Federación de Planificación Familiar, muchos de los médicos que se niegan a realizar abortos no lo hacen por motivos morales o de conciencia, sino “por una objeción de tipo profesional”, para no ser estigmatizados o señalados.

¿Cómo es posible que nuestro derecho a un aborto seguro, gratuito y dentro del sistema público esté supeditado a la objeción de conciencia del médico o la médica de turno? ¿Acaso el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo se evapora si entra en conflicto con las directrices morales de la Iglesia católica? Desgraciadamente, ¡la actual ley lo ampara!

Pero la razón de no realizar abortos en la sanidad pública no es únicamente ideológica, sino también económica: las clínicas abortivas son un negocio muy lucrativo para la patronal de la sanidad pri-

vada. El mejor ejemplo es de nuevo el de la Comunidad de Madrid: desde 2010 a 2019 se han realizado 1.608 abortos en centros públicos (un 0,75% del total) y 210.755 en clínicas privadas derivados de la red pública, un servicio por el que la CAM paga anualmente alrededor de 3,5 millones de euros a estas clínicas. Cuando se trata de hacer negocios, ni Díaz Ayuso ni el PP tienen problema “moral” alguno con el aborto.

Acoso, hostigamiento y tortura psicológica

Un reciente informe elaborado por la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Catalunya y Baleares cita hasta 45 barreras que impiden o dificultan el derecho al aborto. Una vez tomada la decisión de abortar, la mujer tiene que enfrentarse a que no puede hacerlo en un hospital público. Además, debe recoger de forma presencial un sobre informativo —requisito que se mantuvo durante el confinamiento en Madrid y otras comunidades— y pasar por un periodo de reflexión de tres días antes de poder pedir una cita.

Otro de los obstáculos a los que nos enfrentamos es el propio contenido del *sobre*, que depende de las autonomías. En Madrid la información está enfocada a recursos de ayuda a las mujeres que deciden seguir adelante con su embarazo, en lugar de recursos e información útil para interrumpirlo. Además, el epígrafe de centros en los que recibir asesoramiento no aparece y, en su lugar, se enumeran 34 centros de *atención profesional y urgente a la embarazada y madre*, de los cuales 31 son privados, la mayoría religiosos y vinculados con Vox o el PP.

A esto hay que sumar la coacción de grupos ultracatólicos, como Hazte Oír o Derecho a Vivir, que dedican buena parte de sus recursos a acosar a las mujeres que acuden a interrumpir sus embarazos. La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, en su último informe, denuncia que el 89% de mujeres declaró alguna forma de acoso por parte de estos grupos y un 67% de ellas se sintió amenazada durante los procesos médicos.

Hay que enfrentar esta ofensiva de la reacción, pero no bastan los discursos.

El PSOE, que ahora se echa las manos a la cabeza, es plenamente consciente de que el derecho al aborto se incumple sistemáticamente, de que miles de mujeres se ven obligadas a abortar a cientos de kilómetros de sus casas, del acoso que sufren y de que tienen que hacerlo en clínicas privadas, arriesgando sus vidas con muchas menos garantías ante posibles complicaciones que en un hospital público. Durante las décadas en que han estado en el Gobierno no han dejado de ceder ante las presiones de la derecha y la Iglesia católica, ¡y estas son las consecuencias!

Nuestro derecho al aborto no se negocia, ¡se garantiza!

Unidas Podemos ha planteado la necesidad de reformar la ley. Por supuesto que necesitamos mejorar la ley actual, comenzando por prohibir esa supuesta “objeción de conciencia” que solo busca impedir el ejercicio de nuestros derechos, ya sea el aborto o, ahora, la eutanasia. Los médicos reaccionarios que no quieran practicar abortos, ¡que estudien traumatología u otra disciplina! ¿O es que acaso permitiremos que por “objeción de conciencia” un profesor se niegue a enseñar la teoría de la evolución y la sustituya con la Biblia?

Pero no basta con esto. Que un derecho esté reconocido en la ley no garantiza absolutamente nada. Necesitamos medidas reales y concretas, financiación, y los medios personales y materiales necesarios. La única garantía es acabar con el negocio privado de la sanidad: nacionalizar la sanidad privada, incluyendo las clínicas abortivas, y poner esos medios y personal al servicio de la mayoría. Ningún derecho puede estar supeditado al lucro privado, ni el derecho al aborto, ni el derecho a la educación, ni el derecho a la vivienda, ni el derecho a la sanidad universal... ¡ninguno!

Para ello necesitamos depurar de machistas y franquistas el aparato judicial y las instituciones. Acabar con los privilegios de la Iglesia católica y su moral podrida. Enfrentarnos a la reacción y la extrema derecha, a su ideario reaccionario basado en la opresión a las mujeres. Y luchar por acabar con un sistema donde todos estos elementos ejercen su dictadura contra las y los oprimidos. Mientras esto no se haga, cualquier ley será insuficiente. ¡Solo luchando y organizándonos conquistaremos derechos reales y efectivos!

¡Basta de perseguir a quienes luchamos contra los desahucios!

En mayo se produjo el desahucio de una pareja joven y de su bebé en el barrio de Torreblanca, uno de los más humildes de Sevilla. El Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas acudimos a la acción de solidaridad vecinal organizada para tratar de impedir esta injusticia. Una concentración que se desarrolló de forma completamente pacífica y que solo pretendía que CaixaBank no dejara en la calle y sin alternativa habitacional a estos vecinos.

Este es el motivo por el que, casi seis meses después, el Juzgado de Instrucción nº 14 de Sevilla pretende encausar a Ainoa Murcia, secretaria general del Sindicato de Estudiantes de Sevilla y portavoz de Libres y Combativas, investigada por un supuesto delito de resistencia a la autoridad tras una denuncia de la policía.

Firma aquí para exigir la suspensión del proceso judicial contra Ainoa Murcia y el resto de investigados



BASTA DE LGTBIFOBIA, MACHISMO Y FASCISMO

¡LOS DERECHOS TRANS SE CONQUISTAN LUCHANDO!



Libres y
Combativas

Samuel asesinado al grito de “maricón”. Antidisturbios cargando violentamente contra manifestaciones en defensa de los derechos LGBTI. Neonazis paseándose por Chueca amenazando al colectivo y protegidos por la policía. Una campaña de criminalización contra las personas trans que no cesa. Agresiones fascistas que quedan impunes. La justicia patriarcal amparando a maltratadores y violadores.

La discriminación que sufrimos impregna todos los aspectos de nuestras vidas: acoso escolar contra los adolescentes LGBTI, rechazo en nuestros puestos de trabajo o al buscar una vivienda... Una opresión que alcanza niveles insostenibles, especialmente entre las personas trans.

Pero estos ataques no son casualidad. Hay responsables. El discurso y la política del PP y de Vox diseminando su programa machista, racista, homófobo y transfobo, su franquismo y su odio contra la izquierda combativa está detrás de esta escalada.

Los derechos que hemos conquistado tras décadas de lucha están seriamente amenazados. La Comunidad de Madrid dirigida por Isabel Díaz Ayuso, una fascista disfrazada de pepera, es un ejemplo claro. El derecho al aborto en la sanidad pública es negado a miles de mujeres, las personas trans son sometidas a un horror sin fin con listas de espera de hasta un año para la primera consulta y de hasta seis para cirugías... ¡Y además la presidenta ya ha anunciado que modificará las leyes de género y LGBTI para satisfacer las demandas de sus socios de Vox!

Abascal, Casado y compañía quieren devolvernos al armario a palos. Nos han declarado la guerra porque en los últimos años hemos levantado una marea feminista masiva y saben que el germen de

la revolución late en el corazón del movimiento LGBTI de clase y combativo.

¡Feminismo no es transfobia!

Gracias a la lucha hemos conseguido mucho. Si hoy existe una Ley Trans estatal es por la valentía, el coraje y la determinación de las personas trans y todas las que hemos gritado desde las calles que ¡feminismo no es transfobia! Pero, como vemos todos los días, que nuestros derechos estén reconocidos en las leyes no quiere decir que se respeten.

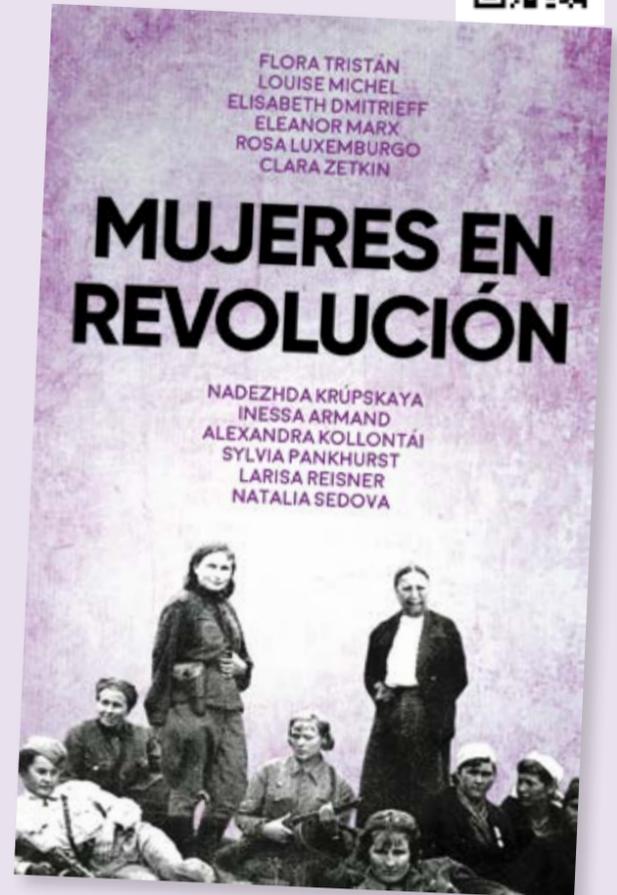
Ceder o ser cómplice de la escalada represiva que estamos sufriendo, como hace el PSOE, solo fortalece a la derecha y le da alas. Por eso denunciamos el feminismo de moqueta y postureo, institucionalizado y transfobo, de aquellas y aquellos que no quieren enfrentarse a la derecha, a la Iglesia y a los capitalistas.

Si queremos igualdad, salarios y empleos dignos, proteger los servicios públicos, y conquistar plenos derechos para la comunidad LGBTI, la clase trabajadora y la juventud, tenemos que confrontar con la jerarquía de la Iglesia, las instituciones del régimen del 78 como la monarquía, y los oligarcas.

La LGTBIfobia, el machismo, las agresiones fascistas y todas las lacras que nos golpean son consecuencia de este sistema podrido y solo con la movilización en las calles, acabando con el capitalismo y construyendo una sociedad socialista podremos poner fin a tanto sufrimiento y ser quienes realmente somos en total libertad.

¡Todas y todos a la manifestación unitaria el 20 de noviembre en Madrid!

CROWDFUNDING



Haz tu aportación en Verkami y ayúdanos a publicar este libro

En los últimos años, millones de mujeres, jóvenes y trabajadoras, que desde pequeñas hemos sufrido el abuso y la explotación, nos hemos rebelado en todo el mundo contra el machismo que perpetra este sistema.

Las feministas revolucionarias, quienes hemos grabado el antifascismo, el antirracismo y el anticapitalismo en nuestra bandera morada, hemos declarado una guerra abierta contra todo tipo de opresión y esclavitud en este momento histórico. Pero no hemos sido las primeras en comenzar a andar este camino. Hemos recogido el testigo de todas aquellas revolucionarias valientes y decididas que nos han precedido en esta lucha.

El marxismo abrió fuego de manera decidida a favor de la liberación de la mujer como nunca antes había sucedido. Y este movimiento ha tenido a grandes revolucionarias, teóricas y militantes, cuyas obras y vidas han sido en muchas ocasiones ocultadas, tergiversadas o directamente eliminadas por la clase dominante.

Fueron muchas las pioneras que jugaron un papel decisivo y de vanguardia. Desde Flora Tristán, socialista y feminista que abogó por la emancipación de la clase obrera y la mujer como un todo inseparable, a Elisabeth Dmitrieff o Louise Michel, quienes se situaron en la barricada de la revolución durante la Comuna de París en 1871; sufragistas internacionalistas como Sylvia Pankhurst; sindicalistas abnegadas como Eleanor Marx; las comunistas alemanas Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo; bolcheviques rusas como Nadezhda Krúpskaya, Alexandra Kollontái, Inessa Armand, Larisa Reisner, Natalia Sedova, entre muchas otras, que en 1917 comenzaron la edificación de una sociedad igualitaria, justa y democrática tras la Revolución de Octubre.

Estudiar el legado de quienes nos precedieron en la larga y memorable lucha por nuestra total emancipación, rescatar a todas estas luchadoras de un olvido interesado y situarlas en el lugar que les corresponde es la tarea que encaramos con *Mujeres en revolución*. Un libro que contiene doce biografías de estas pioneras del feminismo revolucionario. Gracias a que ellas fueron, hoy nosotras somos.

Editado por Libres y Combativas en colaboración con la Fundación Federico Engels





XII Congreso de CCOO

Un cónclave para apuntalar la paz social



Santiago Jiménez
CCOO Sevilla /
Izquierda Revolucionaria

A finales de octubre tuvo lugar el XII Congreso Confederado de CCOO con la reelección de Unai Sordo como secretario general con el 93,7% de los votos emitidos por los 758 delegados y delegadas. Según el comunicado oficial, este apoyo refleja la “unidad y cohesión” del sindicato, que dicen sale fortalecido de este congreso celebrado bajo el lema de “Continuidad y Renovación”.

La realidad tiene poco que ver con este retrato idealizado del proceso congresual y del estado actual del sindicato donde la participación democrática brilla por su ausencia. Las asambleas precongresuales se han caracterizado por la inexistente intervención de la afiliación de base y por la falta de debate interno. Un sistema

controlado desde arriba, donde todo se reduce a rellenar las actas con los nombres de los compromisarios que conformarán el nivel superior de la asamblea.

Al servicio de la política de “unidad nacional”

El resultado de estos métodos burocráticos no es otro que una convención confederal compuesta en su mayoría por cargos que ya ocupan posiciones dentro del aparato del sindicato (puestos a los que se agarran con uñas y dientes), que llevan años emancipados del mundo del trabajo, y por delegados de los grandes centros industriales y empresariales y de la administración pública, con convenios muy por encima de la media de los trabajadores.

Una “aristocracia obrera” muy alejada de la realidad que viven los afiliados de

base, que no representa los intereses del conjunto de la clase trabajadora, y donde los sectores más oprimidos y precarizados del mercado laboral, empezando por la juventud, no tienen cabida.

La voz de las empleadas de hogar, las kellys, los jornaleros e inmigrantes casi esclavizados, de los millones de jóvenes explotados en la hostelería... ha estado totalmente ausente de este acto.

Tampoco ha habido ninguna mención a la pérdida del acta de diputado del ya exmilitante de Podemos Alberto Rodríguez. Este gravísimo ataque a los derechos democráticos, que ha coincidido con la celebración del congreso, no ha merecido la más mínima crítica contra el aparato judicial franquista, ni hacia el PSOE.

El objetivo del congreso era otro muy distinto. Se trataba de apuntalar la política de “unidad nacional” y reafirmar la

complicidad de la cúpula de CCOO con la patronal y la política de un Gobierno de coalición que en lo fundamental está aplicando la agenda dictada por los capitalistas. De esta forma entre los invitados ha habido una amplia representación del Gobierno, desde el saludo telemático de Pedro Sánchez, hasta las ministras de Economía, Nadia Calviño, y Trabajo, Yolanda Díaz, junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Todo en un ambiente de cordialidad y espíritu de colaboración.

Recuperar las Comisiones combativas y democráticas

Las resoluciones del congreso no se han movido un centímetro de la nefasta política sindical centrada en la concertación y el diálogo. El saldo de esta estrategia conciliadora lo conocemos: más precariedad y un constante empeoramiento de las condiciones laborales.

De esta misma forma se está abordando la supuesta “derogación” de la reforma laboral. Dicen pretender acabar con la contrarreforma del PP por consenso, planteando con la boca pequeña que si no se avanza comenzarán con las movilizaciones.

Las Comisiones Obreras que fundaron miles de trabajadores sacrificados y combativos para luchar contra la represión, bajos salarios y miseria generalizada es el modelo que tenemos que recuperar los afiliados y afiliadas de CCOO. El problema no es la falta de disposición a la lucha de los trabajadores, sino el papel de unos dirigentes que han abandonado el sindicalismo combativo y se aferran a otro de gestión, impotente ante los ataques empresariales.

Es necesario romper con los pactos y colaboración con la patronal y levantar una alternativa de lucha enarbolando la bandera del sindicalismo combativo, asambleario y revolucionario, cuestionando la lógica capitalista, llegando a los sectores más oprimidos de nuestra clase y a aquellos que hoy dan la espalda a un sindicato aburguesado. Necesitamos un sindicato que defienda sus derechos de forma consecuente y que se enfrente con decisión a la actitud depredadora de la patronal.

Por qué militamos en

IZQUIERDA REVOLUCIONARIA



José María Gil
Trabajador
Guadalajara

Pablo Cortés
Estudiante
Guadalajara

José María Gil.- Llevo militando en organizaciones de izquierdas desde los 16 años. Tras mantener diferentes discusiones, me incorporé a Izquierda Revolucionaria en 1992, pues defendía un sindicalismo combativo y democrático. En Guadalajara participamos en multitud de movilizaciones, por el convenio provincial del Metal, contra el cierre de Carrier, enfrentando la oposición de los dirigentes sindicales.

Más tarde, en mi empresa, Progalsa, estuvimos tres meses movilizándonos

contra el cierre. Hicimos 17 días de huelga, convocamos dos manifestaciones de solidaridad, con miles de trabajadores, cortamos carreteras e incluso acampamos en un parque del centro de la ciudad. Lamentablemente, tuvimos que combatir a la empresa, la Administración y a las direcciones sindicales, que hicieron piña contra los trabajadores. La empresa cerró, pero no tuvimos la sensación de derrota, al contrario, salimos con la cabeza alta por una lucha digna. Militar en Izquierda Revolucionaria para mí es fun-

damental para comprender y resistir las presiones de la burguesía y me da herramientas para explicar a los trabajadores el programa revolucionario.

Pablo Cortés.- Conocí Izquierda Revolucionaria a través del Sindicato de Estudiantes, donde comencé mi militancia política. Me afilié en plena lucha contra los recortes en Educación. El PP, recién llegado al Gobierno, lanzaba los primeros ataques a la pública. En esos años de movilizaciones me quedó clara la nece-

sidad de acabar con el sistema capitalista. Pero para ello es necesaria una lucha organizada y consciente.

Izquierda Revolucionaria conjuga perfectamente teoría marxista e intervención en la lucha de clases. No puede haber práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria. Por eso creo que seguir construyendo Izquierda Revolucionaria es la mejor forma de trabajar por acabar con este sistema y conseguir que todas las personas puedan vivir una vida que merezca la pena ser vivida.

El sindicalismo combativo arrasa en las elecciones de Danosa (Guadalajara)



El 5 de octubre se celebraron las elecciones sindicales en Danosa en Fontanar (Guadalajara). La lista de Co.Bas arrasó, obteniendo un 70% de votos y cinco delegados, frente a uno de CCOO y otro de UGT. Estas elecciones han sido un ejemplo más del amplio respaldo y espacio que existe para

las candidaturas que defienden un sindicalismo combativo, de clase y democrático. Entrevistamos a Felipe Palacios, nuevo presidente del comité de empresa por Co.Bas y militante de Izquierda Revolucionaria y Sindicalistas de Izquierda.

EL MILITANTE.- ¿Por qué presentasteis una candidatura alternativa?

Felipe Palacios.- Existía un descontento importante entre la plantilla por diferentes motivos. La forma en la que la empresa utilizaba las categorías profesionales y los complementos de antigüedad, más que ser un derecho lo aplicaba como recompensas individuales. También se sumaba al cabreo las múltiples sanciones arbitrarias de la empresa por tomar café, por fumar...

La pandemia marcó un antes y un después. Los días previos al confinamiento el comité demostró que no era capaz de hacer frente a la empresa. Esos días, el jefe daba asambleas a todos los trabajadores a la hora de la entrada para explicar que Danosa no podía parar la producción. Es decir, la empresa ponía sus beneficios por encima de nuestra salud y el comité ni siquiera contestaba.

Al volver del confinamiento Danosa presentó un ERTE totalmente innecesario. De hecho, iba a durar tres meses, pero se suspendió por la elevada carga de trabajo.

Estos hechos fueron un punto de inflexión para que decidiésemos presentar una lista alternativa.

EM.- ¿Qué propuestas hicisteis durante la campaña electoral?

FP.- Teníamos claro que no nos presentamos para hacer lo mismo que el antiguo comité. Explicamos a la plantilla que nuestro modelo sindical pasaba por un sindicalismo democrático y combativo. Durante la campaña repartimos una hoja en la que proponíamos las reivindicaciones que vamos a exigir a la empresa para mejorar nuestras condiciones laborales.

Hemos insistido en la necesidad de devolver la voz a los trabajadores y trabajadoras. La decisión final sobre los temas fundamentales (calendario, turnos, etc.) tiene que ser de la plantilla. Además nos hemos comprometido a rendir cuentas de nuestra actividad explicando en el tablón para qué utilizamos las horas sindicales. Estas propuestas nos ayudaron a diferenciarnos.

EM.- ¿Por qué crees que la lista de Co.Bas arrasó?

FP.- La clave fue que recogimos el descontento de la plantilla por la política sindical de paz social en la empresa. Al final daban por bueno todo lo que planteaba la dirección sin que hubiera ningún elemento de crítica. Además, se justificaban culpando a los trabajadores de que no se podía hacer frente a la empresa porque la plantilla “no se mueve”.

Nuestra candidatura fue el cauce de expresión del descontento con el comité y hacia esos vicios del “sindicalismo” acomodado que ha abandonado la lucha, como cogerse las horas sindicales para cosas que no tienen nada que ver.

EM.- ¿Este será el primer paso para formar Co.Bas en Guadalajara?

FP.- Esta victoria ha sido un primer paso importante. Hay más delegados y trabajadores de otras empresas que están mirando al sindicalismo alternativo. Si conseguimos avances, Co.Bas se puede convertir en un punto de referencia. Especialmente tenemos que orientarnos al sector de la logística, donde trabajan casi 30.000 personas en Guadalajara.

“Hay que devolver la voz a los trabajadores”

La política de paz social solo ha beneficiado a la patronal, mientras que los trabajadores vemos a diario cómo perdemos derechos y nuestras condiciones de vida se degradan. Por eso es necesario más que nunca un sindicalismo combativo, de clase y democrático, como el que defendemos desde la plataforma Sindicalistas de Izquierda y desde Izquierda Revolucionaria. Estamos convencidos de que Co.Bas puede crecer significativamente en el próximo periodo en Guadalajara.



Antonio Muñoz
Delegado CGT en Elmec Navantia San Fernando

La ruptura de las negociaciones del convenio del metal de la provincia de Cádiz ha llevado a la convocatoria por parte de CCOO y UGT de huelga los días 9 y 10 de noviembre, y de huelga indefinida a partir del 16. Las pretensiones de la patronal del metal para el convenio son un nuevo y brutal ataque al que solo podremos hacer frente con la unidad del conjunto de trabajadores y trabajadoras y la firmeza de las diferentes organizaciones sindicales.

Las firmas de los dos anteriores convenios a espaldas de los obreros del sector significaron un claro retroceso en nuestras condiciones económicas y sociales.

En el convenio que rigió desde enero de 2012 hasta diciembre de 2016, la patronal, esgrimiendo como argumento la crisis capitalista mundial, nos exigió sacrificios para ser “competitivos” y que el sector capease el temporal. Los sindicatos firmantes dieron por bueno ese argumento, de modo que nos tocó cargar con las consecuencias de una crisis en la que no teníamos responsabilidad alguna.

Nuestro siguiente convenio, firmado para el periodo 2016 a 2020 y que sigue vigente, profundizó aún más los retrocesos. Una patronal envalentonada ante la pasividad de los dirigentes sindicales que lo negociaban, nos impuso una ampliación de la jornada laboral y mayor discriminación entre trabajadores indefinidos y eventuales, hasta el punto de que la aplicación del plus TPP (tóxico, penoso,

Huelga del Metal en Cádiz ¡Basta de retrocesos y pérdida de derechos!

peligroso) no depende de las condiciones de toxicidad o peligrosidad del trabajo que se realiza, sino del tipo de contrato laboral, ¡una injusticia con la que hay que acabar en este nuevo convenio!

Ahora la patronal quiere deteriorar aún más nuestras ya duras condiciones: congelar los salarios en 2021, quitarnos una paga extra este año y el próximo, aumentar la jornada laboral, eliminar los controles sobre las horas extras...

Desde Sindicalistas de Izquierda e Izquierda Revolucionaria participaremos

con todas nuestras fuerzas en la convocatoria de huelga, porque solo la movilización decidida será capaz de frenar esta nueva ofensiva. Para ello el primer paso tiene que ser la convocatoria de asambleas unitarias de trabajadores y trabajadoras, donde marquemos los pasos a dar. Es necesario que los sindicatos que negocian se comprometan a respetar las decisiones de las asambleas y a no firmar el convenio a nuestras espaldas.

En las asambleas hay que aprobar una plataforma de convenio por la que val-

ga la pena luchar: exigir la reducción de jornada, que se mantengan las actuales pagas extras y una subida salarial digna, que permita mantener un poder adquisitivo gravemente amenazado por la subida de los precios, con cláusula de revisión vinculada a la evolución del IPC. Y, por supuesto, tenemos que acabar con la discriminación salarial entre trabajadores antiguos, de nueva contratación y eventuales. Esa discriminación desemboca siempre en la rebaja generalizada de todos los salarios.



El multimillonario y macabro negocio de los **opioides** en **EEUU**



Alex García
Izquierda Revolucionaria
Madrid

2020 fue el año en que vimos colapsar la capital mundial del sistema capitalista. La pandemia provocó más de medio millón de muertos en la primera potencia, y el desempleo se disparó, generando un enorme problema en la salud mental de los más vulnerables. Esta insoportable realidad hizo que los sectores más precarizados buscaran un refugio para evadirse: el consumo de heroína y de otros opioides creció con virulencia.

2020 también será recordado por ser el año con más muertes por sobredosis en la historia de EEUU: casi 100.000, un 30% más que el año anterior y diariamente 136 fallecidos por consumir opioides, la mayoría proporcionados bajo prescripción médica.

Mientras este infierno se extendía entre nuestra clase, los principales grupos farmacéuticos aumentaron sus beneficios exponencialmente. Las ganancias de Johnson & Johnson, Pfizer o Merck se dispararon un 50% en 2020. Una vez más, la burguesía se hace de oro a costa de nuestro sufrimiento.

Una de las mayores masacres de la historia

Los opioides se han cobrado la vida de medio millón de personas en las dos últimas décadas, el equivalente a un 11-S cada tres semanas. Las sobredosis se han convertido en la principal causa de fallecimiento no natural en los menores de 50 años, cada 25 minutos nace un bebé con síndrome de abstinencia debido al consumo de opioides durante el embarazo, 27 millones de personas los consumen y más de dos millones son adictas.

La causa fundamental de esta epidemia ha sido la estrategia de la industria farmacéutica para poner en el mercado analgésicos altamente adictivos. Con un sistema sanitario completamente privatizado, estas corporaciones han encontrado vía libre para hacer beneficios multimillonarios con la venta de pastillas recetadas (se ha cuadruplicado su prescripción en los últimos años) para tratar dolencias comunes de los trabajadores más precarios. Las farmacéuticas han ido generando una bolsa de adictos que ha terminado pasándose al consumo de heroína. El 80% de los consumidores actuales de esta sustancia abusaron de opioides recetados.

Una matanza de esta envergadura es impensable sin la connivencia del Gobierno y las autoridades sanitarias. En Virginia Occidental, por ejemplo, existe un pueblo de 400 habitantes donde se expide una receta de opioides por minuto. En su gran mayoría no son para autoconsumo, sino que van directamente al mercado negro.

No existe la libertad en una sociedad dividida en clases

Es la clase obrera y sus sectores más golpeados por la crisis quienes concentran la mayor tasa de adicción —del 73% entre jóvenes y mujeres con ingresos inferiores a 25.000 dólares anuales— y sobre los que recaen las consecuencias más devastadoras.

El escenario de esta nueva epidemia se encuentra en las zonas más golpeadas por la desindustrialización y el desempleo. En lugares como Baltimore o San Francisco el retroceso social ha llegado a niveles inverosímiles: los adolescentes de los barrios más empobrecidos se enfrentan a peores condiciones de salud y opciones de vida que su misma generación en zonas urbanas de Nigeria, India o Uganda.

Ahora, republicanos y demócratas —quienes han aplicado las políticas que han generado esta destrucción social— se echan las manos a la cabeza cínicamente, rehúyen su responsabilidad, su absoluta complicidad con el gran negocio de los opioides, y señalan a los toxicómanos como los causantes individuales de esta enorme crisis.

Esta posición mezquina obvia la cuestión de clase. No se puede ser libre en una sociedad donde existen opresores y oprimidos. Las farmacéuticas, los cárteles, los proxenetas, la patronal del juego... requieren de la existencia de millones de seres humanos desesperados para poder hacer negocio.

Por eso es un disparate hablar de “libertad individual” bajo este sistema. Nuestras decisiones están determinadas por las condiciones de vida. La pobreza, el miedo a perder el empleo y a no llegar a fin de mes son los mecanismos con los que el capitalismo cercena nuestra libertad. Solo quienes viven al margen de la explotación y la necesidad pueden defender un discurso tan nauseabundo.

La izquierda reformista y algunos grupos que se declaran marxistas, pero actúan como comparsas, no se cansan de reproducir este enfoque: “las drogas son algo personal, forma parte de la libertad individual”, sin entender que es lo contrario. Las adicciones no solo generan un negocio formidable a los capitalistas, son una forma de control social fundamental para bloquear la lucha de clases.

Por supuesto, perseguir al pequeño consumidor y criminalizarlo forma parte de la estrategia de la burguesía. Con una mano crea el mercado para el consumo de opioides, con la otra culpa a los adictos y encarcela a los camellos de poca monta. Y mientras tanto, los grandes narcotraficantes se codean con banqueros y empresarios farmacéuticos sin que nadie les moleste.

Y todos defienden con el mismo entusiasmo la legalización de la industria de la droga como solución para acabar con los cárteles, y como la mejor manera de proteger a los toxicómanos. Como si convertir a los narcotraficantes en “honrados empresarios” fuera a significar más recursos para la sanidad pública, mejores empleos y salarios para la juventud, y menos represión.

La guerra contra la droga, o la excusa perfecta para aumentar la represión

No aceptar la legalización no significa que defendamos la represión contra el consumidor o el pequeño productor. Rechazamos tajantemente cualquier postura moralista y reaccionaria que abogue por aumentar las tendencias autoritarias de los Estados ante problemas sociales. Esto es parte del mensaje clasista y racista de la clase dominante con la intención de crear estados policiales en los barrios y criminalizar a la juventud.

Estados Unidos es el mejor ejemplo de cómo la “guerra contra la droga” se ha transformado en una salvaje persecución y hostigamiento de los más oprimidos, especialmente la población afroamericana más pobre, que ha sido parte esencial de los movimientos revolucionarios más poderosos, como los Panteras Negras o Black Lives Matter.

EEUU tiene el 25% de los presos del planeta, los afroamericanos con casi el 40% son la parte mayoritaria. Porcentajes que no han dejado de aumentar incluso en los estados donde se han legalizado el cannabis o determinados opioides, demostrando lo equivocados que están quienes afirman que la legalización supondría el fin de la represión.

La burguesía criminaliza y reprime en los guetos mientras protege a quienes realmente sacan tajada del comercio de la droga. Los cárteles, en colaboración con los principales bancos estadounidenses, obtienen al año ganancias de 29.000 millones de dólares. Los traficantes y sembradores se quedan con el 5%, es decir, el 95% restante termina en manos de la gran banca, las farmacéuticas y las grandes empresas de Wall Street.

Por una sociedad libre de explotación y alienación

Para la clase dominante la droga supone un formidable negocio, una justificación para aumentar la represión y, además, permite introducir una sustancia enormemente nociva entre los sectores más radicalizados de la juventud, aplacando su espíritu de lucha y eliminando cualquier atisbo de organización política.

El combate contra la droga tiene que ser una prioridad para las organizaciones revolucionarias. Hay que enfrentar el problema de raíz, defendiendo una alternativa socialista, nacionalizando las farmacéuticas, la banca y todas aquellas industrias que se enriquecen a costa de este negocio mortal, e invirtiendo los recursos fabulosos que hoy monopoliza una minoría de parásitos en empleo digno, en vivienda pública accesible y decente, en sanidad y educación públicas universales, en equipamientos culturales y un ocio que no sea beber y drogarse. Solo así acabaremos con cualquier tipo de necesidad y crearemos las condiciones para la genuina libertad.



Nueva publicación de la Fundación Federico Engels

“Comprender las causas del auge del fascismo es importante, pero lo es más entender que solo la revolución social puede derrotarlo”

Obreros en armas. República, revolución, antifascismo es el último libro de Juan Ignacio Ramos publicado por la Fundación Federico Engels. Autor de numerosos artículos sobre política, historia del movimiento obrero y teoría marxista a lo largo de más de treinta años, Juan Ignacio es secretario general de Izquierda Revolucionaria. En esta entrevista le preguntamos sobre los motivos de este nuevo trabajo.



EL MILITANTE.- Otro material sobre la revolución y la guerra civil española, ¿por qué ahora?

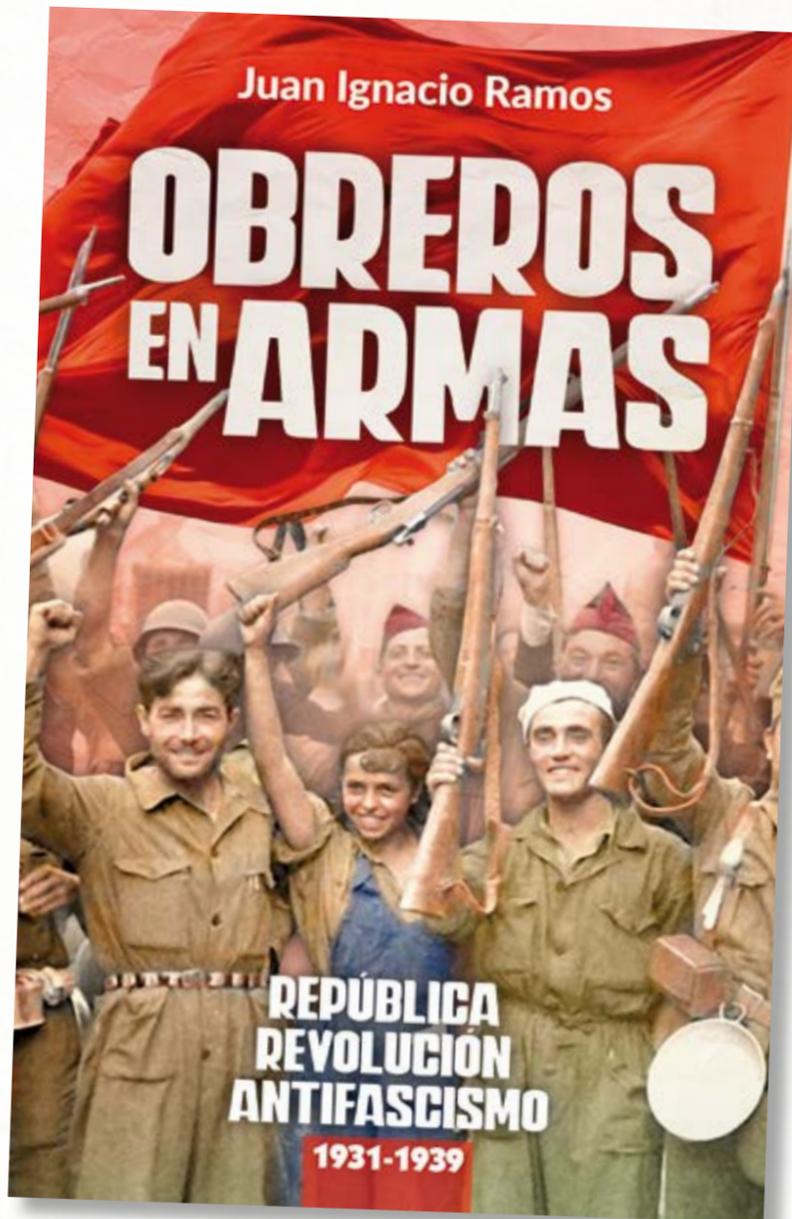
Juan Ignacio Ramos.- La política del día a día sigue estando condicionada, y de qué manera, por la larga sombra que proyectan aquellos acontecimientos. El hecho de que los dos principales partidos de la derecha, PP y Vox, justifiquen los crímenes de la dictadura, y que el aparato del Estado, su judicatura, sus mandos militares y policiales, sin olvidar a la *armada* mediática, estén nutridos de los mismos clanes familiares que coparon las altas esferas franquistas, indica que vivimos una democracia tutelada por unos poderes fácticos preparados para todo.

Y digo para todo con plena conciencia. La crisis económica y social de los años treinta, la proclamación de la Segunda República, la decadencia de la democracia parlamentaria y la extrema polarización política, así como el auge del fascismo y de la lucha revolucionaria de los trabajadores... presentan un terreno de estudio excepcional para entender la situación política actual del Estado español y de todo el mundo.

EM.- Estamos viviendo un importante auge de la extrema derecha. Trump, Bolsonaro, Abascal, Marine Le Pen y muchos otros nombres representan una amenaza de envergadura, pero la izquierda reformista solo contempla la defensa de la “democracia” burguesa para frenarlo. ¿Qué opinión te merece esta estrategia?

JIR.- La ofensiva de la reacción, su envalentonamiento y su determinación para devolvernos a tiempos atroces son síntomas muy relevantes de la profundidad y gravedad de la crisis del capitalismo. El avance de estas fuerzas provoca un ambiente de pesimismo entre sectores de activistas, y esta percepción se fortalece por las decepcionantes políticas del reformismo clásico, la socialdemocracia, y de formaciones que expresaron el auge de la lucha en años pasados, como Syriza o Podemos, pero que se han derrumbado ideológicamente y se contentan con un posibilismo estrecho que no da ninguna solución a los problemas de la clase obrera y la juventud.

Comprender las causas del auge de la extrema derecha, de formaciones que re-



presentan una forma actualizada de fascismo, es muy importante, pero lo es más entender que solo la revolución social puede derrotarlo. También ahora las condiciones para el éxito de la revolución, a pesar de la propaganda oficial, están madurando con fuerza en todo el mundo.

EM.- ¿Qué aporta este nuevo libro y a quiénes va dirigido?

JIR.- La historia social y política de la Segunda República sigue animando una gran cantidad de investigaciones y publicaciones, destacando el esfuerzo que una nueva generación de historiadores está realizando para sacar a la luz los episodios aún ocultos de la represión fascis-

ta. Pero, en general, las grandes casas editoriales producen un tipo de material que se puede dividir *grosso modo* en dos categorías.

La primera orbita en torno a la reivindicación acrítica del período republicano, idealizando su legislación laboral o educativa, y su respeto por el parlamentarismo burgués. Esta versión sirve de guía para una izquierda gubernamental que se ha resistido con uñas y dientes a reparar con justicia a las víctimas de la dictadura. Sus pactos con los herederos del franquismo durante la Transición alumbraron el régimen del 78, legítima-

ron la monarquía borbónica y garantizaron completa impunidad a los asesinos, torturadores y represores.

La otra categoría, representada por personajes como Pío Moa o César Vidal, no es más que revisionismo histórico para blanquear a los golpistas del 18 de julio y justificar tanto el exterminio de decenas de miles de activistas de izquierda, como la supresión de las libertades democráticas durante cuarenta años.

Pero existe otro enfoque diferente, minoritario, aunque mucho más fiel a la verdad, que sitúa en el centro de aquel drama histórico a los trabajadores y campesinos sin tierra. *Obreros en armas* pertenece a esta última categoría y trata de la acción directa de los oprimidos, capaz de contener el avance fascista con las armas en la mano y demostrar, en los hechos, que construir una sociedad igualitaria, sin capitalistas, terratenientes ni curas, es posible.

Este libro parte de trabajos anteriores que escribí, especialmente de *Los años decisivos. Teoría y práctica del Partido Comunista de España*, y está dirigido prioritariamente, aunque no solo, a los jóvenes activistas de la izquierda, que llenan las movilizaciones antifascistas, contra la violencia machista, en defensa de la educación pública y el medio ambiente, por el derecho a decidir en Catalunya y Euskal Herria, y que el marxismo tiene la obligación de sumar a sus filas. Sin su participación, el partido revolucionario no se podrá construir con éxito.

En las páginas de *Obreros en armas* encontrarán la dura lucha de clases que desembocó en la guerra civil, conocerán el papel de las llamadas potencias “democráticas”, cuya infame política de “no intervención” bloqueó la ayuda a la República, de los nazis alemanes y fascistas italianos, que proporcionaron al ejército de Franco un respaldo militar, técnico y económico imprescindible, sin olvidar a Stalin y al estalinismo, y su calculada política de evitar a toda costa el triunfo de una revolución proletaria en suelo español.

Obreros en armas
240 págs. | PVP 10 euros

Otros títulos de la Fundación sobre la Revolución española y la guerra civil



La derecha y la Iglesia nos niegan nuestro derecho a un aborto seguro en la sanidad pública

¡Basta de excusas! El Gobierno PSOE-UP debe garantizarlo



Libres y
Combativas

Han pasado once años desde la aprobación de la reforma de la Ley del Aborto en el Estado español. Esta ley fue una conquista histórica del movimiento feminista: por fin, 35 años después de la dictadura franquista, se reconocía el derecho a un aborto libre, seguro y gratuito, dentro del sistema público, para cualquier mujer que así lo decidiera (hasta la semana 14 de gestación) sin tener que alegar riesgos para nuestra salud mental ni tener que recurrir a que un psiquiatra nos avalase, como ocurría anteriormente.

Sin embargo, esta ley se incumple sistemáticamente, negando en la práctica a cientos de miles de mujeres el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo.

Aunque la ley especifica claramente que “la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma” (artículo 19.2 de la Ley Orgánica 2/2010), en 2020 únicamente el 6,28% de los abortos se realizó en hospitales públicos y un 9,21% en centros especializados de la red pública, según datos del Ministerio de Sanidad. ¡Casi el 85% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en clínicas privadas!

La “objeción de conciencia”, una excusa para el negocio millonario de las clínicas privadas

Los datos no dejan lugar a duda, pero son aún más escalofriantes si tenemos en

cuenta que existen comunidades autónomas (Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón y las ciudades de Ceuta y Melilla) en las que se derivan siempre a clínicas privadas concertadas con la sanidad pública, en algunos casos a cientos de kilómetros del hogar de las embarazadas. Cada año más de 6.000 mujeres tienen que desplazarse a otra provincia para poder abortar, y en ocho provincias (Palencia, Zamora, Ávila, Segovia, Teruel, Cuenca, Toledo y Cáceres) no se ha notificado ningún aborto desde 1988, lo que no se corresponde con las peticiones realizadas.

¿Y cómo justifican las administraciones este desvío sistemático para hinchar el negocio de las clínicas privadas? Escudándose detrás de la mal llamada obje-

ción de conciencia de las y los médicos. Hace unas semanas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, alardeaba de que ella no iba a “obligar a ningún médico de la Sanidad Pública madrileña a practicar un aborto contra su conciencia, que es el motivo por el cual empezó a estudiar medicina, para salvar vidas y no para hacer lo contrario”. Unas declaraciones realizadas tras destaparse que el 100% de los ginecólogos del Hospital Clínico, y de la inmensa mayoría de los hospitales públicos de Madrid y Murcia, eran objetores de conciencia y que esa era la razón por la que se desviaban a la privada.

PASA A LA PÁGINA 10 ▶



IZQUIERDAREVOLUCIONARIA.NET



ÚNETE

Contacta con nosotros a través de nuestras webs o en el WhatsApp 610 23 39 33 para participar en la lucha.

IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

www.izquierdarevolucionaria.net